

Del Olmo pide a todas las consejerías un informe ante la 'guerra' de la financiación

Encarga estudios del «coste real» de los servicios / Recaba ideas del CES para 'armar' un pacto político y social / Aboga por revisar el cupo vasco y aumentar su 'cuota' de solidaridad

RAQUEL SASTRE / Valladolid
El comité de evaluación que sentará las bases para la negociación del futuro modelo de financiación autonómica celebrará su primera reunión a la vuelta de Navidad y la Junta quiere sentarse a debatir con cifras objetivas, sin eslóganes políticos.

Por eso, la responsable de Hacienda, Pilar del Olmo, ha encargado a sus compañeros de Gobierno la elaboración de «informes técnicos» para cuantificar el «coste adicional» que le supone a la Junta prestar servicios en Castilla y León, conforme a sus singularidades territoriales, demográficas y de otra índole.

La consejera presentará este estudio a las fuerzas parlamentarias – con las que mantiene abierto un grupo de trabajo– y a la sociedad civil para sumar aportaciones. Su intención es cerrar un documento, avalado por el consenso «político y social», que oficializará ante el Ministerio de Hacienda.

Precisamente a recoger ideas fue ayer Pilar del Olmo a la sede del Consejo Económico y Social (CES). Allí expuso en primer lugar –haciendo gala de sus dotes pedagógicas– los vicios del modelo vigente, que ha dejado «de media» un agujero anual de «654 millones» en la caja de los ingresos, en cinco años de vigencia.

¿Por qué perjudica ese sistema a Castilla y León? La consejera aportó tres razones. La primera: el alto porcentaje de cesión de impuestos (el 50% en IVA e IRPF) «distorsiona» el reparto, en la medida en que favorece a autonomías más dinámicas y donde tributan las rentas más altas.

Tampoco es positiva la distribución de recursos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, ya que los factores no poblacionales tienen un «peso muy bajo». Y, por último, llamó la atención sobre el paquete de tributos cedidos, «agotado» en su capacidad recaudatoria, y sobre la «distorsión so-

bre la unidad de mercado» que provoca el «céntimo sanitario».

Realizado el diagnóstico de situación sobre un modelo de financiación «complejo y poco transparente» –apostilló–, la responsable de la Hacienda autonómica resumió las dos máximas que defenderá la Junta ante su reforma.

La primera está en el Estatuto: que el reparto de recursos no puede hacerse *per capita*, sino en función de variables como el envejecimiento, la dispersión, la densidad demográfica o la extensión del territorio. Para muestra, dos botones: la atención sanitaria es cinco veces más costosa en un mayor de 75 años que en una persona de entre 15 y 45; y el gasto medio de profesor por alumno

en el medio rural duplica al ocasionado en la ciudad.

Segunda premisa. El modelo de financiación debe cubrir también el gasto de servicios públicos no esenciales, y aquí se encuadran las carreteras, el patrimonio artístico y natural, o la prevención de incendios. «De la conservación de Parques Naturales no se benefician sólo los ciudadanos de Castilla y León y es injusto que se pague sólo con nuestros impuestos; y el mantenimiento de carreteras es esencial, porque por ellas pasan ambulancias y autobuses escolares», razonó la consejera.

Con este punto de partida, el Ejecutivo de Herrera se afanará en concienciar a la sociedad de lo «mucho» que «se juega» Castilla y León ante

una negociación –la segunda que dirigirá Pilar del Olmo–, marcada por «tensiones con el Gobierno».

La batalla con Montoro está en cuánto dinero extra aporta al sistema y cómo lo reparte. Aunque, probablemente temiendo tratos de favor a Cataluña, Del Olmo avisa: «La negociación debe ser multilateral y en el Consejo de Política Fiscal».

En este punto, la consejera invitó al ministro a reflexionar sobre la posibilidad de revisar también el sistema foral –modelo de financiación «más beneficioso» por el que se rigen País Vasco y Navarra–. Sin cuestionar sus «privilegios constitucionales», sí abogó por mejorar los «mecanismos de solidaridad» con el resto de autonomías.



El presidente del CES, Germán Barrios, recibe a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ayer. / ICAL

GERMÁN BARRIOS
Presidente del CES

«Debemos ir a un modelo sin privilegios, que valore la eficacia»

R. S. / Valladolid

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), Germán Barrios, defendió ayer que la revisión de la financiación autonómica debe conducir a un «modelo de Estado, sin privilegios para las comunidades y que desarrolle el artículo 156 de la Constitución sobre la solidaridad interregional».

Para lograr esta meta y conseguir un sistema «estable» en el tiempo, la reforma debe obedecer a «consideraciones técnicas» y estar «despolitizada», no como ocurrió con la anterior, dijo, que dio lugar a un «modelo bilateral pactado entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña», apostilló.

Tras exponer la mecánica del reparto de fondos que consagra la Ley de Financiación, Barrios señaló que el Ministerio de Hacienda también debe tener en cuenta la «eficacia y eficiencia» en la prestación de los servicios, a la hora de valorar las consideraciones de cada comunidad, si bien antepuso la necesidad de garantizar el «principio de suficiencia» para «proteger el Estado de Bienestar».

En este sentido, el presidente del CES llamó la atención sobre los perjuicios que ha ocasionado a Castilla y León el sistema vigente de reparto de fondos, por primar en exceso el factor *per capita*, por el que se rige la territorialización del 97% de los fondos, señaló.

Así, anticipándose al argumento que con posterioridad ofrecería la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, Barrios denunció que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Esenciales «no paga el coste real de los servicios en Castilla y León».

SANTIAGO APARICIO *Cecale*

«Debe haber un acuerdo de los dos grandes partidos»

«El modelo de financiación autonómica debe reformarse con el acuerdo de los dos grandes partidos para dotarlo de estabilidad». Fue la idea defendida por el presidente de la patronal autonómica (Cecale), Santiago Aparicio, en la jornada de debate en el CES. Idea que bendijo después la consejera Pilar del Olmo. El líder de los empresarios señaló que la negociación debe ajustarse a criterios «técnicos y jurídicos» y «no políticos», aunque dio por perdida esta batalla al reconocer que «quien acaba dictando las normas es el Gobierno». Aparicio abogó también por un «régimen de financiación común», donde «desaparezcan los privilegios», en alusión al régimen foral de País Vasco y Navarra. «Si eso no es posible, al menos que aporten más», agregó.

ÁNGEL HERNÁNDEZ *CCOO*

«Las tensiones territoriales van a marcar el modelo»

«No podemos negar ni obviar que las tensiones territoriales van a marcar el modelo». El secretario general de CCOO, Ángel Hernández, abogó por «reinventar» el modelo territorial –defendió un Estado federal, como su homólogo de UGT– de forma que «aporte más el que más tiene, con un tope de solidaridad». El líder sindical recordó que en esta negociación deben estar muy presentes el «impacto de la reforma local» y el reto de volver al Estado de Bienestar previo a la crisis. «No se puede pactar sobre lo recortado; si no, certificamos la muerte de la criatura», dijo. También advirtió de que el ámbito de negociación para este asunto en el caso de CCOO será fuera del CES y que «no se sumará» a ningún acuerdo previo, sino que lo discutirá en solitario.

AGUSTÍN PRIETO *UGT*

«Un Estado de Bienestar homogéneo y de precrisis»

«Estamos de acuerdo en que el Estado de Bienestar debe ser homogéneo en toda España, pero nosotros también queremos recuperar lo perdido estos años». El secretario autonómico de UGT, Agustín Prieto, instó a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a calcular las necesidades de gasto sobre las cifras previas a la crisis, cuando había «800 millones más» para los grandes servicios públicos. Consciente de que el sistema tributario español es culpable de la insuficiencia financiera del modelo, Prieto también recordó a la Junta que tiene su cuota de «responsabilidad fiscal». El líder ugetista planteó estas consideraciones ante la imposibilidad, por ahora, de avanzar hacia un modelo federal, con «caja única», que fue su apuesta.